



Asamblea General

Distr. general
23 de mayo de 2013

Español solamente

Consejo de Derechos Humanos

23º período de sesiones

Tema 3 del programa

**Promoción y protección de todos los derechos humanos,
civiles, políticos, económicos, sociales y culturales,
incluido el derecho al desarrollo**

Exposición escrita* presentada por Permanent Assembly for Human Rights, organización no gubernamental reconocida como entidad consultiva especial

El Secretario General ha recibido la siguiente exposición por escrito que se distribuye con arreglo a la resolución 1996/31 del Consejo Económico y Social.

[10 de mayo de 2013]

* Se distribuye esta exposición escrita sin editar, en el/los idioma(s) tal como ha sido recibida de la(s) organización(es) no gubernamental(es).

Deuda externa

La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), de conformidad con los Informes del experto independiente sobre las consecuencias de la deuda externa y otras obligaciones financieras internacionales conexas de los Estados para el pleno disfrute de todos los derechos humanos, especialmente los derechos económicos, sociales y culturales, A/64/289, y la Resolución del Consejo de Derechos Humanos A/HRC/RES/17/7, A/HRC/14/21, y A/67/304 desea esgrimir algunas consideraciones, particularmente, en lo que concierne a la Deuda Externa en la República Argentina.

En primer lugar, es preciso señalar que se produjo un endeudamiento desenfrenado del Estado Argentino durante la última dictadura militar, que usurpó el poder político durante el período 1976-1983, ascendiendo de la suma de 7.000 millones de dólares a 43.000 millones. En segundo lugar, que la Deuda Externa Argentina es ilegal, ilegítima e inhumana. Ha sido contraída en violación expresa de las disposiciones constitucionales vigentes, y contra las normas del Derecho Internacional. Esto es así, toda vez que la deuda odiosa ha sido contraída sin el consentimiento ni la aprobación de los representantes de los ciudadanos; el dinero prestado ha sido destinado a actividades, intereses o necesidades que difieren los de la nación; y por último, el préstamo se caracteriza por el alto interés aplicable al efecto.

Esta forma de endeudamiento, ha sido utilizada por un gobierno despótico para subyugar a los oponentes al gobierno de facto. Los acreedores eran plenamente conscientes de la situación y por eso sostenemos la existencia de una corresponsabilidad entre el acreedor y el deudor en la prevención y resolución de endeudamiento insostenible. Ello, en virtud del “principio de responsabilidad compartida” reconocido en la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, Monterrey, y confirmado por el reconocimiento de la responsabilidad de Noruega en el endeudamiento de Ecuador en 2006 (A/HRC/14/21/Add.1).

La APDH insiste también para señalar que el pago de los intereses de la deuda constituye un obstáculo al desarrollo y al cumplimiento de las obligaciones de los Estados hacia sus ciudadanos. El alza unilateral, arbitraria y abusiva, tienen consecuencias gravosas para el cumplimiento las obligaciones en materia de derechos humanos.

En efecto, estamos frente a un caso de usura, toda vez que los intereses fueron elevados muy por encima de los niveles vigentes cuando se contrajeron las deudas, y la condena a la usura es un principio de derecho humano mencionado en el artículo 38, punto 1 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia.

Por ello, la APDH propone definir unánimemente los criterios que componen una deuda ilegítima, posiblemente ante la solicitud de una opinión consultiva a la Corte Internacional de Justicia.

La APDH considera que la legalidad de la Deuda Externa de países en desarrollo, como Argentina, o con situaciones de pobreza y retraso en la satisfacción de necesidades elementales, debe ser puesta en consideración de un tribunal internacional imparcial que detente la legitimidad jurídica y política suficiente y que dictamine conforme a Derecho Internacional. Insta, por tanto, a los Estados a que promuevan tal iniciativa. En caso que una deuda sea calificada total o parcialmente ilegítima, apoyamos su anulación sin condiciones.

En otro orden de ideas, la APDH también encuentra preocupante al asedio de los “fondos buitres” con respecto a la República Argentina y los países endeudados.

En primer lugar, cabe recordar el impacto nefasto de los “fondos buitres” (“vulture fund”) sobre el pago de la deuda. El método de esos fondos de inversión privados consiste en comprar en el mercado secundario deuda de Estados soberanos por una suma mucho menos a su valor nominal, y después exigir por la vía judicial que esta se pague por su valor total, es decir, el importe inicial de la deuda más los intereses y costes legales.

Según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI), estos depredadores de las finanzas habrían acumulado alrededor de 2.000 millones de dólares y son objeto de numerosos casos judiciales, incluyendo África y América del Sur. En la República Argentina, los “fondos buitres” compraron títulos de deuda del país hasta el 20% de su valor original, y exigieron que les pagaran el 100% del valor nominal aprovechando de la crisis económica que explotó en 2001. Mientras que la mayoría de los acreedores de Argentina aceptaron un pago de la deuda a un valor nominal menor, los tenedores de los fondos buitres -como por ejemplo los casos de NML Capital Ltd. y de Elliot Management- rechazaron esa solución que permitía al país recuperarse económicamente. De eso resultó el 2 de octubre 2012 tras una decisión de la justicia ghanesa la incautación en Ghana de la Fragata Libertad, un buque de guerra argentino, respondiendo a la demanda de embargo interpuesta por el fondo NML. Afortunadamente, ni el embargo de la Fragata, ni los otros veintisiete embargos impuestos por los “fondos buitres” contra Argentina desde 2001, encontraron éxito.

Aparte de Argentina, muchos países fueron o siguen siendo víctimas de estos fondos. En 1999, después de un juicio iniciado por el fondo buitre Elliot Associates, Perú fue obligado a pagar 58 millones de dólares por una deuda que compró por 11 millones de dólares. Nicaragua fue condenada a pagar 87 millones de dólares al fondo Leucadia por una deuda adquirida al valor de 1,14 millones de dólares. Un ejemplo más reciente es el de SNEL (empresa pública de la República Democrática del Congo) contra FG Hemisphere, fondo que compró en 2004 una deuda de 18 millones de dólares y reclamó en 2007 el pago de 104 millones de dólares.

Teniendo en cuenta la situación de los países endeudados, el relator especial de las Naciones Unidas sobre Deuda Externa y Derechos Humanos, Cephias Lumina insistió en diciembre pasado sobre la necesidad de prohibir a los “fondos buitres”. Recordando los Principios de las Naciones Unidas, C. Lumina declaró que “los acuerdos de préstamo deberían imponer claras restricciones sobre la venta o la asignación de deuda a terceras partes sin autorización previa del Estado prestatario implicado”. La nueva crisis de deuda es una bendición para los fondos buitres. Hoy en día, muchos países prohíben que los fondos buitres puedan demandar ante sus tribunales el cobro de esa deuda. Para que sea eficaz la lucha contra los “fondos buitres” tanto los países del Norte como los del Sur tienen que movilizarse. Es esencial que los Estados adopten leyes dirigidas a eliminar los mecanismos de acción de estos fondos. En este sentido, la APDH subraya el impulso dado por Bélgica que, después de haber sido víctima del fondo buitre Elliot Associates en 2008, ha adoptado una ley muy poderosa para luchar contra estos fondos. Otros países iniciaron proyectos de leyes contra los fondos buitres pero queremos recordar la importancia del carácter general en conjunto de los países para que de este tipo de medidas resulte eficaz.

Es por ello que la APDH insta a los Estados a que enfrenten el avance irrestricto de los fondos buitres y de los paraísos fiscales, fenómenos de consecuencias nefastas, productos de las crisis financieras de los países en desarrollo que ocasionan a la economía real.